

SEÑORES

**TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –  
SECCIÓN TERCERA.**

**MAGISTRADA PONENTE: DRA. CLARA CECILIA SUÁREZ VARGAS**

E.

S.

D.

**REF:** MEDIO DE CONTROL REPARACIÓN  
DIRECTA.

**DEMANDANTES:** CARINE PENING GAVIRIA Y  
OTROS.

**DEMANDADOS:** E.S.E. HOSPITAL SAN  
RAFAEL DE FUSAGASUGÁ II NIVEL,  
ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. –  
CLÍNICA DEL COUNTRY E INVERSIONES  
SEQUOIA COLOMBIA S.A.S. – CLÍNICA VIP  
CENTRO DE MEDICINA INTERNACIONAL.

**RADICACIÓN** **No.**  
11001333603320150008102

**ASUNTO:** ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE  
SEGUNDA INSTANCIA

**ANA MARÍA DE BRIGARD PÉREZ**, en calidad de apoderada judicial principal de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. – CLÍNICA DEL COUNTRY** dentro del proceso de la referencia, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal correspondiente, me permito presentar alegaciones finales de segunda instancia, en los siguientes términos:

<p><b>OPORTUNIDAD PARA LA RADICACIÓN DEL PRESENTE ESCRITO</b></p>
---

Mediante auto del 3 de agosto de 2020 el Juzgado 33 Administrativo del Circuito de Bogotá, admitió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte actora contra la sentencia proferida el 8 de junio de 2020.

Mediante auto del 30 de septiembre del año en curso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, admitió el recurso de apelación interpuesto por la actora y ordenó –por Secretaria- correr traslado a los sujetos procesales de dicho recurso, por el término común de 10 días.

Teniendo en cuenta que la notificación a la suscrita fue recibida el martes 18 de octubre, al momento de radicar este escrito nos encontramos dentro de la oportunidad procesal correcta.

<b>ALEGATOS DE CONCLUSIÓN SEGUNDA INSTANCIA</b>
---

De manera respetuosa solicitamos al Honorable Tribunal tener en cuenta (como complemento de este documento) la amplia y sustentada argumentación expuesta en el escrito de alegaciones presentado al concluir el trámite de primera instancia, ya que, con el fin de evitar reiteraciones innecesarias, en esta oportunidad nos limitaremos a adicionar a nuestro análisis previo, una reflexión sobre los argumentos que dieron origen a este recurso, en lo que tiene que ver específicamente con la actuación de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. – CLINICA DEL COUNTRY**.

En efecto, al revisar en detalle el recurso de apelación presentado por la parte actora – en adelante recurrente - encontramos que más que inconformidades en contra de la decisión judicial que le resultó adversa, acude el apelante a esta Corporación, pidiendo reconsiderar en todo su contenido el fallo, reiterando uno a uno los argumentos expuestos durante el debate y que, con el mayor respeto, fueron discutidos, demostrados y descartados después de un análisis completo, ordenado y ajustado a derecho por la falladora de instancia.

Como ustedes advertirán, entre tantas citas jurisprudenciales (muchas no aplicables al caso), transcripciones de historias clínicas y de dictámenes periciales recaudados, es difícil establecer cuáles son puntualmente las inconformidades planteadas por el recurrente contra la decisión judicial proferida por el Juzgado 33 Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá, el 8 de junio de 2020, que le fue adversa y muy concretamente porque se aparta de la decisión en cuanto tiene que ver con **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. – CLÍNICA DEL COUNTRY**.

Haciendo un esfuerzo de síntesis, en aras de la claridad, encontramos que en relación con la falla en el servicio endilgada a mi mandante, dos son los argumentos esgrimidos:

El primero, relacionado con una supuesta falla en la prescripción y administración de la tromboprofilaxis suministrada a Doña Irma Elena de Belén Gaviria de Pening y el segundo, relacionado con su referencia a otra IPS de alta complejidad, según instrucciones de su entidad aseguradora, para la culminación de su atención.

A estos dos argumentos de inconformidad en contra de la **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S – CLÍNICA DEL COUNTRY** se reduce el alegato presentado y a ellos en particular haremos referencia en este escrito, solicitando al Despacho, repito, que tome en consideración - como parte integral de este escrito - el alegato de conclusión radicado ante el Juzgado 33 Administrativo en su momento procesal y que por considerarlo innecesario y poco respetuoso, evitamos transcribir. Sin embargo, no por ello dejan de tener relevancia tanto el análisis de los hechos que dan origen a la reclamación, como del material probatorio recaudado y que, a la postre, como era natural, llevaron a descartar el reproche endilgado a mi mandante.

En efecto, afirma el apoderado recurrente que la juez de instancia incurrió en un error de apreciación de la prueba recaudada en el proceso y que, a su juicio, contrario a lo concluido en la sentencia, se habían demostrado errores en el proceso de atención de la señora Irma Elena de Belén que, en su criterio, cuando menos deberían significar una condena por una oportunidad perdida.

En criterio del recurrente, reposan en el expediente pruebas que indican que la actuación de las instituciones demandadas fue errada y puntualmente afirma que **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. - CLÍNICA DEL COUNTRY** incumplió los presupuestos normativos propios de las historias clínicas y de las obligaciones asistenciales y a ello atribuye su participación en el resultado dañoso.

Desconoce, con respeto, mi contraparte, que sus argumentos no por iterativos se convierten en ciertos y así lo apreció la señora juez de instancia.

Repito el colega que **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S - CLÍNICA DEL COUNTRY** desconoció las normas legales en materia de atención integral de víctimas de accidentes de tránsito y que omitió impartir un plan terapéutico preciso a la institución de salud receptora, que significó un riesgo para la seguridad del proceso asistencial.

Si bien no es necesario hacer un recuento fáctico exhaustivo de los hechos debatidos, si hay algunos elementos de análisis fundamentales, que no pueden ser pasados por alto al momento de analizar el fondo del proceso:

1. Es un hecho cierto y demostrado que la señora Irma Elena de Belén Gaviria de Penning, sufrió un grave accidente de tránsito, en la vía a Icozongo - Cundinamarca, en calidad de pasajera, que puso en riesgo su vida.
2. Que el accidente fue de tal magnitud que una persona resultó muerta *in situ* y otra fue trasladada a otro centro asistencial en situación crítica.
3. Que gracias a la articulación de los diferentes actores del sistema de salud, la paciente Irma Elena de Belén Gaviria de Penning, recibió atención inicial en un centro hospitalario cercano al lugar del accidente, el HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUSAGASUGA y cuando su capacidad y recursos humanos, físicos y tecnológicos se vieron sobrepasados, fue remitida a **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S - CLÍNICA DEL COUNTRY** para su atención en un centro de alta complejidad.
4. Que el tiempo que tomó el proceso de referencia de la paciente (aproximadamente 10 horas) no fue producto del descuido o la falta de diligencia del remitente, sino a que los requerimientos de una unidad de cuidados intensivos o en su defecto, de cuidados intermedios, son recursos escasos en la ciudad.
5. Que la condición clínica de Doña Irma Elena de Belén a su ingreso a **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S - CLÍNICA DEL COUNTRY** era muy delicada y que en su recepción, estabilización y plan de manejo

ulterior, se dispusieron los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura, de la más alta calidad, en forma oportuna, integral, interdisciplinar, segura, racional y pertinente, hasta el punto de lograr sobrepasar, con éxito, una condición potencialmente letal.

6. Que en la atención dispensada por el equipo de profesionales y de la institución hospitalaria misma, no se observan desviaciones a la pauta de conducta exigida para casos análogos, ni barreras o condicionantes de atención o intereses reprochables que hubiesen interferido en la atención, con óptima calidad, de la usuaria.
7. Que el proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes está debidamente autorizado, reconocido y regulado por las directrices regulatorias nacionales y que no puede deducirse, de la movilidad segura entre instituciones sanitarias, una falla del servicio.
8. Que la racionalización y diseño de la red de prestadores de servicios es una responsabilidad asignada por ley a las entidades promotoras de servicios de salud y que son ellas, quienes deben estructurar y disponer de los mecanismos para atender a sus afiliados en todos los niveles de complejidad que pudiesen llegar a necesitar, por causa o con ocasión de una enfermedad o de un accidente.
9. Que el prestador de servicios de salud que remite un paciente a otro prestador habilitado, atendiendo las instrucciones impartidas por la EPS, debe garantizar condiciones de referencia seguras pero la verificación de recursos, cumplimiento de estándares de habilitación y decisiones clínicas posteriores, se escapan completamente de su órbita de control y, por consiguiente, carecen de la potencialidad de vincularla con los desenlaces en salud que, de manera tardía, se llegaren a presentar.
10. Que en el caso concreto, la remisión de la señora Irma Elena de Belén Gaviria de Pening se dio por instrucciones de su EPS (Cafesalud) hoy Medplus a una institución de alta complejidad que cuenta con adecuados y reconocidos estándares de calidad, donde fue recibida y tratada por su cuerpo médico y paramédico propio, sin subordinación o dependencia alguna con mi mandante, de manera que sus actuaciones, determinaciones y órdenes de servicio solo le compete a ellos explicar, como juiciosamente lo hicieron durante el debate.
11. Que el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes en la ciudad de Bogotá, se formaliza a través de un formato oficial diseñado para el efecto por la Secretaria Distrital de Salud.
12. Que la información requerida fue debidamente consignada por los profesionales del área correspondiente de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S - CLÍNICA DEL COUNTRY**, que fue entregada a la entidad aseguradora como presupuesto previo al traslado de su afiliada

13. Que las determinaciones clínicas adoptadas por los galenos de INVERSIONES SEQUOIA COLOMBIA S.A.S – CLÍNICA VIP CENTRO DE MEDICINA INTERNACIONAL, entre las cuales se advierte la suspensión de la anticoagulación con enoxaparina que venía recibiendo la paciente durante su estancia en **CLÍNICA DEL COUNTRY**, no fue una omisión o un desconocimiento profesional, sino, como lo afirmaron los expertos, una determinación basada en criterios de beneficencia, ante una situación compleja, con riesgos potenciales inherentes a cualquier forma de resolución del dilema.
14. Que la decisión de prescribir anticoagulación a una paciente adulta mayor, víctima de politrauma mayor, próxima a ser intervenida quirúrgicamente, no es inocua y por ello debe ser ponderada de manera profesional y ecuánime por quien la adopta, buscando siempre que el balance entre el riesgo y el beneficio incline la balanza hacia este último.
15. Que aun con terapia de anticoagulación farmacológica y mecánica es imposible llevar a cero el riesgo de que se produzcan trombos, grasos o de sangre, después de un accidente de alto impacto.
16. Que el lamentable desenlace de la paciente Irma Elena de Belén Gaviria de Pening se produjo como consecuencia del severo accidente en que se vio involucrada y muchos días después de haber sido dada de alta de **ADMINISTRADORA COUNTRY – CLÍNICA DEL COUNTRY** y con posterioridad a haber recibido la atención médica de parte de un grupo profesional externo, autónomo e independiente, en otra institución sanitaria de la ciudad, de manera que no existe vínculo causal alguno entre las actuaciones y decisiones adoptadas por mi mandante y el resultado adverso cuya reparación se persigue.
17. Que la totalidad del material probatorio recaudado durante la instrucción descarta que mi mandante, como institución, o sus profesionales, como agentes, hayan incurrido en una falla o culpa en su comportamiento o se hayan desviado en el cumplimiento del marco regulatorio o de las prescripciones científicas para el manejo del trauma mayor, de manera que la conclusión favorable del *a quo*, lejos de ser arbitraria o contraria a derecho, es la consecuencia natural del ejercicio de la sana crítica del operador judicial respectivo.

Expuesto a grandes rasgos el escenario fáctico demostrado en el debate, más allá de cualquier duda y a través de medios de prueba que garantizaron los derechos fundamentales de todos los integrantes de la litis, correspondió a la Juez 33 Administrativa de Oralidad proferir una sentencia, como de manera atinada lo hizo.

Refiere el fallo recurrido que para que se pueda deducir responsabilidad en contra de un agente demandado, se deben demostrar tres elementos fundamentales, a

saber: la culpa o falla en el servicio, la producción de un daño antijurídico y la causalidad entre estos dos extremos.

Para el caso que nos ocupa, ninguno de tales elementos concurre en cabeza de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. – CLÍNICA DEL COUNTRY** de manera que no hay lugar a imponerle una obligación resarcitoria.

En cuanto a la prueba de la culpa o de la falla del servicio, según se trate de instituciones de derecho privado o público, el régimen aplicable a la responsabilidad es el de la culpa probada.

Descendiendo al caso concreto, la parte actora insiste en que el dictamen pericial de parte que aportó al plenario, emitido por una médica general con especialización en auditoria, perteneciente a una organización denominada Firma Asesores y Gestores en Salud y Bienestar – Aseggestor Embellece S.A.S. (cuestionada tanto por sus competencias y formación profesional como por no haber entregado las guías y la bibliografía que había utilizado para respaldar algunas de sus opiniones) es una prueba suficiente para demostrar su aserto, desconociendo que las historias clínicas, las guías oficiales, las declaraciones de múltiples expertos<sup>1</sup>, de un profesional en cirugía general, entrenado en la atención de trauma y designado como perito por la Asociación Colombiana de Cirugía (Dr. Maikel Adolfo Pacheco Trujillo), de los médicos que atendieron a la paciente y enfrentaron los dilemas propios de su actividad profesional e incluso el propio resultado de la necropsia realizada en el Instituto de Medicina Legal, coinciden en que no se observa el pretendido error en el comportamiento de los sujetos demandados, muy especialmente del atribuido a **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S – CLÍNICA DEL COUNTRY**.

Carece el actor, y por ello fue desechada su pretensión, de pruebas que respalden su reiterada solicitud de indemnización y salvo el dictamen pericial de parte que en su recurso transcribe y que, por lo menos en lo que tiene que ver con la actuación de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S – CLÍNICA DEL COUNTRY**, solo hace observaciones formales en nada contributivas al daño deprecado, ningún otro medio de prueba respalda sus afirmaciones y muy por el contrario, aclaran que la atención dispensada a Doña Irma, aun sabiendo su fatal desenlace días más tarde, no fue producto de un error, descuido o negligencia.

Es esa la razón y no un error del juzgador de instancia o un defecto en la valoración probatoria las que explican el fundamento del fallo recurrido.

Se enrostra a mi mandante, en el mencionado recurso de apelación, no haber atendido en forma oportuna y racional la severidad de padecimientos de Doña Irma Gaviria quien fue víctima de accidente de tránsito de indiscutible severidad (en que perdió la vida otro de los ocupantes, uno más se encontraba en estado crítico y ella misma presentaba lesiones variadas y de consideración que

---

<sup>1</sup> Contribuyeron con sus declaraciones a esclarecer los asuntos objeto de debate los Dres. Sandy Johana Pérez Rodríguez, Julián Andrés García, Carlos Cuellar Cubides, Carlos Roberto Cortés Páramo, Charles Elleri Bermúdez, Raúl Andrés Villamil Espinosa, Diego Mauricio Cubillos Apolinar.

ameritaron su atención hospitalaria inmediata) cuando la totalidad del material probatorio recaudado muestra una realidad totalmente diferente, como acertadamente fue analizado en la sentencia impugnada.

Contrario a lo afirmado por el recurrente en su recurso, no omite el operador judicial de primera instancia el análisis de ninguno de los medios de prueba recaudados durante la instrucción, sin embargo, confunde el impugnante que el hecho de que se haya arribado a una conclusión distinta a la que él perseguía, no resulta ser un argumento suficiente para hablar de error judicial o de apreciación probatoria.

En nuestra opinión, la decisión impugnada coincide con el material probatorio recaudado, incluso con las conclusiones del dictamen pericial de parte aportado por el mismo actor, que descartan una atención viciada, indebida, descuidada o apartada de las guías y recomendaciones científicas aplicables a casos como el de la señora Irma Elena de Belén Gaviria de Pening por parte del personal o de la institución sanitaria que represento.

Con suficiencia se abordó el tema del manejo médico impartido a la víctima del accidente, Sra. Irma Elena de Belén Gaviria de Pening, analizando paso a paso su proceso de atención durante su estancia en la **CLÍNICA DEL COUNTRY** y comparándolo con las recomendaciones científicas aplicables al trauma mayor y a las guías oficiales sobre la materia, concluyendo, como era natural, que hubo estricta adherencia a la pauta indicada.

El debate acerca de la pertinencia y seguridad de la remisión de la paciente a otra institución sanitaria, también fue adelantado y después de un análisis normativo y fáctico prolijo, se descartó que con tal determinación se hubiese faltado o cumplido indebidamente el estatuto regulatorio nacional o las obligaciones asistenciales propias de una institución de alto nivel de complejidad como lo es **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S - CLÍNICA DEL COUNTRY**.

Expuesto lo anterior y ante ausencia de prueba de la culpa o falla del servicio, pilar fundamental de una reclamación de responsabilidad como la que nos ocupa, la pretensión resarcitoria estaba llamada a fracasar.

Mención adicional, aunque breve para no caer en repeticiones innecesarias ni extender este escrito, debemos hacer frente a otras imputaciones -también descartadas en su sentencia por el *a quo*- en relación con una presunta causalidad entre la atención dispensada por mi mandante y el fatal desenlace de Doña Irma, con base en el cual se pretende una declaración de oportunidad fallida o pérdida.

Alega el actor que el traslado entre instituciones sanitarias supuso para la paciente un riesgo y una interrupción de su proceso de atención. Este reproche no ha pasado de ser una apreciación personal de su parte, en la medida en que la totalidad del material probatorio recaudado demuestra una atención integral, secuencial y consistente, sin que se observen fracturas o interrupciones por fuera de la norma.

Basta una lectura del historial clínico aportado y de las declaraciones y pruebas técnicas recaudadas para confirmar la calidad del cuidado dispensado a Doña Irma Elena de Belén en la institución mandante y la inexistencia del error o defecto que se ha planteado.

Afirma el demandante que al no haberse enviado un plan específico de manejo de la paciente a la Clínica VIP al momento en que se hizo efectiva la remisión, interrumpió el suministro de anticoagulación a la enferma, como si la prescripción de este fármaco hubiese dependido de tal formalismo.

Desconoce el recurrente que a la luz del material recaudado, en especial de los testimonios técnicos provenientes de los médicos especialistas - testigos técnicos - de la Clínica VIP, que la decisión de su personal médico de no prescribir anticoagulación a la paciente (no a su ingreso el 23 de octubre sino a su salida el 26 del mismo mes) no fue producto de una omisión o un descuido inadvertido sino una decisión profesional, consiente y racional adoptada por los médicos que participaron en la atención de Doña Irma, en consideración al riesgo que suponía anticoagularla cuando tenía pendiente y programada una cirugía ortopédica unos días más tarde.

Tampoco le asiste razón, y no hay prueba alguna que lo respalde, en relación con una posible información incompleta provista por el grupo de referencia de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S – CLÍNICA DEL COUNTRY** antes del traslado, no solo porque la información oficial propia del proceso de referencia y contrarreferencia de pacientes se aportó y diligenció en debida forma, sino porque (si en gracia de discusión hubiese algún faltante) no existe subordinación alguna entre IPS de alta complejidad en materia de decisiones clínicas que hubiese condicionado o inhibido al nuevo grupo tratante a cargo de la atención de la señora Gaviria de Penning, para adicionar o suprimir fármacos a su receta.

La paciente Gaviria de Penning recibió atención médica en la Clínica VIP desde el 23 de octubre de 2009 donde estuvo ingresada, valorada y medicada por un cuerpo de profesionales calificados y con formación y criterio, que consideraron, a su salida el 26 de dicho mes, que no era conveniente mantenerla anticogulada, no por olvido o porque la **CLÍNICA DEL COUNTRY** no se los hubiese ordenado, sino por qué, según lo afirmaron en sus declaraciones los testigos técnicos, lo consideraron riesgoso teniendo programada la intervención posterior de sus extremidades.

No hubo pues, omisión o interrupción de un tratamiento por causa de un error (inexistente) en el proceso formal de referencia, sino el ejercicio de un juicio profesional adoptado con base en el criterio, experiencia y formación, del cuerpo facultativo de la Clínica VIP.

Habiendo mediado un tiempo prudencial entre el egreso de la señora Irma Elena de Belén de **ADMINISTRADORA COUNTRY S.A.S. – CLÍNICA DEL COUNTRY** y su deceso y habiéndose sucedido una internación en otra institución sanitaria en el intermedio, a cargo de profesionales independientes y autónomos, es imposible establecer un nexo causal entre la sensible defunción de la paciente y la intervención cuestionada.



En estas condiciones y por las razones ampliamente expuestas y sustentadas no solo en este documento sino en las restantes actuaciones procesales, en especial en la contestación de la demanda planteada a nombre de nuestra representada, del acervo probatorio recaudado durante la instrucción, en nuestros alegatos de cierre y muy particularmente en el análisis minucioso expuesto en la sentencia proferida por la señora Juez 33 Administrativa del Circuito, el 8 de junio de 2020, de manera atenta solicitamos a esa Honorable Corporación, su confirmación.

De la Honorable Magistrada, con toda atención.



**ANA MARÍA DE BRIGARD PÉREZ**

C.C. No. 51.699.955 de Bogotá

T. P. No. 44.980 del C. S. de la J.

presidencia@amdebrigard.com